



05/11/2022

SECCIÓN AMPARO
INCIDENTE DE SUSPENSIÓN 1528/2022-VIII.

OFICIO 23859.
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO. (CIUDAD)

OFICIO 23860.
RESPONSABLE DEL FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES CENTRO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO. (CIUDAD)

OFICIO 23961.
TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO. (CIUDAD)

OFICIO 23862.
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO. (CIUDAD)

OFICIO 23993.
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO. (CIUDAD)

EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN CON NÚMERO SEÑALADO AL RUBRO, DERIVADO DEL JUICIO DE AMPARO 1528/2022-VIII, PROMOVIDO POR [REDACTED] POR PROPIO DERECHO Y EN REPRESENTACIÓN DEL MENOR DE INICIALES O.F.A.V., CONTRA ACTOS DE USTED, CON ESTA FECHA SE DICTÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:

"Guanajuato, Guanajuato, veinticinco de noviembre de dos mil veintidós.

Como se ordena en el expediente principal y con fundamento en los artículos 125, 128, 138 y 140 de la Ley de Amparo en correlación con el numeral 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los Órganos Jurisdiccionales, se inicia incidente de suspensión relativo a la demanda promovida por [REDACTED], por propio derecho y en representación del menor de iniciales O.F.A.V., únicamente con el expediente físico original, sin que sea necesaria la formación de su duplicado.

Con fundamento en los numerales 138 y 140 de la ley de la materia, envíese a las autoridades señaladas como responsables, copia de la demanda de amparo, a fin de que estén en posibilidad de rendir su informe previo, lo que deberán hacer dentro del lapso de CUARENTA Y OCHO HORAS, cumpliendo con los siguientes requisitos:

1. Expresar si es o no cierto el acto reclamado que se le atribuye.
2. Manifiestar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión.
3. Proporcionar los datos que tengan a su alcance que permitan a este juzgado de distrito establecer el monto de las garantías correspondientes.

Se les apercibe que de no hacerlo o de rendirlo fuera del término, con fundamento en la fracción I del artículo 260 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa de CIENTO MIL Unidades de Medida y Actualización.⁴

⁴ De conformidad a lo dispuesto en el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación de salario mínimo, publicado en el Diario

Gobierno Municipal de Guanajuato
Secretaría del H. Ayuntamiento
RECIBIDO
28 NOV. 2022
Hora: 3:48 Recibió: [REDACTED]
Anexos: [REDACTED]

05/11/2022



5 512424 24002

Ahora bien, de conformidad con los artículos 107, fracción X Constitucional, 128, 131, 138, 139 y 147 de la Ley de Amparo, se procede a determinar si en la especie resulta factible conceder la **suspensión provisional** solicitada por la parte quejosa sobre los siguientes actos reclamados:

1. La **contaminación** del Río que atraviesa por el Municipio de Guanajuato, Guanajuato, ubicado bajo las coordenadas geográficas **20.996445, -101.287799**, generada con motivo de las constantes descargas de aguas residuales en ese lugar.
2. La **omisión** de las autoridades responsables de **prevenir la contaminación ambiental** generada con motivo de las citadas descargas.

En tal virtud, es necesario traer a colación lo que al efecto establecen los referidos numerales, los cuales son del siguiente tenor literal:

"Artículo 107.- (...)...

X.- Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. (...)..."

Artículo 128.- Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurren los requisitos siguientes:

- I. Que la solicite el quejoso; y
- II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.

La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado.

Asimismo, no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial.

Las normas generales, actos u omisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica, no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva."

"Artículo 131. Cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un **interés legítimo**, el órgano jurisdiccional la concederá cuando el quejoso acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento.

En ningún caso, el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquéllos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda.

"Artículo 138.- Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público, en su caso, acordará lo siguiente:

I. Concederá o negará la suspensión provisional; en el primer caso, fijará los requisitos y efectos de la medida; en el segundo caso, la autoridad responsable podrá ejecutar el acto reclamado;

II. Señalará fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental que deberá efectuarse dentro del plazo de cinco días; y

III. Solicitará informe previo a las autoridades responsables, que deberán rendirlo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para lo cual en la notificación correspondiente se les acompañará copia de la demanda y anexos que estime pertinentes."

"Artículo 139. En los casos en que proceda la suspensión conforme a los artículos 128 y 131 de esta Ley, si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicios de difícil reparación para el quejoso, el órgano jurisdiccional, con la presentación de la demanda, deberá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, tomando



las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero y se eviten perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible, ni quede sin materia el juicio de amparo.

Cuando en autos surjan elementos que modifiquen la valoración que se realizó respecto de la afectación que la medida cautelar puede provocar al interés social y el orden público, el juzgador, con vista al quejoso por veinticuatro horas, podrá modificar o revocar la suspensión provisional.

Artículo 147. En los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensiva siga surtiendo efectos.

Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo.

El órgano jurisdiccional tomará las medidas que estime necesarias para evitar que se defrauden los derechos de los menores o incapaces, en tanto se dicte sentencia definitiva en el juicio de amparo."

La transcripción que antecede pone de relieve que el artículo 128 de la Ley de Amparo, entre los requisitos que señala para la procedencia y concesión de la suspensión de los actos reclamados, prevé los relativos a que bastará que la solicite el quejoso, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y, que en el caso de que hubiere peligro inminente de la ejecución del acto reclamado, se ocasionen perjuicios de difícil reparación para el quejoso.

Asimismo, se desprende que el objetivo del otorgamiento de la suspensión solicitada, en los términos a que se refieren los ordinales 128 y 131 de la ley de la materia, es evitarle al quejoso que se le ocasionen perjuicios de difícil reparación con la ejecución del acto reclamado, sin que ello implique exigir al juzgador, hacer una valoración del resultado que se puede presentar en la sentencia definitiva, pues sólo se prevé una apreciación provisional que no atiende a la afectación posterior de mérito, sino solamente a la apariencia del buen derecho y al peligro en la demora.

Además, sobre el tema de la suspensión, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que para concederla, sin dejar de observar los requisitos plasmados en los artículos precedentes, se puede realizar la comprobación de la apariencia del buen derecho invocado por el quejoso, de modo tal que, de acuerdo con un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declare la inconstitucionalidad del acto reclamado, sin que ello implique prejuzgar sobre la certeza del derecho, pues éste se resolverá en la sentencia definitiva en el estudio de fondo del juicio, lo que no implica que el otorgamiento de la medida cautelar permita que se trastoquen el interés social y el orden público, pues entonces deberá negarse la suspensión, ya que no puede estar el derecho individual por encima del de la sociedad, además de que deberá ponderar el peligro en la demora que consiste en la posible frustración de los derechos del solicitante de la medida, que se pueden concretar como consecuencia de la tardanza en el dictado de la sentencia.

En la especie, el primer requisito que se requiere colmar para que el Juez de Distrito pueda pronunciarse en relación con la suspensión de los actos reclamados, relativo a la existencia de solicitud expresa de la parte quejosa, se encuentra satisfecho, dada su fácil apreciación objetiva, **ante la petición manifiesta en el escrito de demanda.**

Ahora bien, por lo que hace al siguiente requisito, concerniente a que para conceder la medida cautelar es necesario que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, es conveniente precisar que el orden público y el interés social se afectan cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría; **lo que en el caso no acontece.**

Lo anterior, ya que de conceder la suspensión para los efectos pretendidos por los quejosos, lejos de ocasionar perjuicio al interés social o al orden público, **le generaría un bienestar a la colectividad**, pues ésta tiene interés en que las autoridades, en el ámbito de sus competencias, ejerzan las



facultades que las leyes y reglamentos les confieren en materia de servicios públicos, así como a que se les garantice un medio ambiente sano.

Al respecto, atendiendo a la naturaleza de los actos reclamados y las consecuencias que producen en la esfera jurídica de los quejosos, es necesario precisar que de los artículos 116, fracción VII y 115, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos⁵, se desprende que las Entidades Federativas que conforman la República Mexicana, adoptaran para su régimen interior el municipio libre, que tendrá a su cargo las funciones y servicios públicos básicos, a saber, agua potable, drenaje, alcantarillado, calles, parques avenida, seguridad pública, limpieza de calles, entre otros.

En concordancia con lo anterior, el artículo 116, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato y sus Municipios dispone lo siguiente:

Servicios a cargo del ayuntamiento

Artículo 167. Los ayuntamientos tendrán a su cargo los siguientes servicios públicos:

II. **Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales;**

[...]

Bajo ese parámetro, a fin de lograr la efectividad de los servicios públicos, los Municipios, a través de sus diversas direcciones, delegan su funcionamiento y prestación a fin de garantizar su acceso a toda la ciudadanía.

En el tema que guarda relación con los actos reclamados, es oportuno enfatizar el margen de acción con el que cuenta el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato, Guanajuato, el cual deriva de los artículos 10, fracción I, 50 y 56 del Reglamento del Servicio Público de Agua Potable y Servicios Complementarios para el Municipio de Guanajuato, que establecen:

5 "...**Artículo 116.** El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo.

Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas:

[...]

[...]

VII. La Federación y los Estados, en los términos de ley, podrán convenir la asunción por parte de éstos del ejercicio de sus funciones, la ejecución y operación de obras y la prestación de servicios públicos, cuando el desarrollo económico y social lo haga necesario.

Los Estados estarán facultados para celebrar esos convenios con sus Municipios, a efecto de que éstos asuman la prestación de los servicios o la atención de las funciones a las que se refiere el párrafo anterior."

Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes:

[...]

III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales;

b) Alumbrado público.

c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;

d) Mercados y centrales de abasto.

e) Panteones.

f) Rastro.

g) Calles, parques y jardines y su equipamiento;

h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva municipal y tránsito; e



Artículo 10.- Además de las obligaciones específicas, el SIMAPAG tendrá las siguientes obligaciones de carácter general:

I. Operar el servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, **tratamiento y disposición de aguas residuales;**

Artículo 50.- El SIMAPAG, promoverá el establecimiento de sistemas de desinfección y potabilización del agua, así como **del tratamiento de aguas residuales** y manejo de lodos, el fomento de sistemas alternos que sustituyan al drenaje sanitario, cuando éste no pueda construirse y las demás acciones de saneamiento.

Artículo 56.- Corresponde al SIMAPAG, la detección, extracción, conducción, desinfección y potabilización del agua; la planeación, construcción y mantenimiento de las redes y equipo necesario para el suministro de este servicio a la población, así como el de alcantarillado, drenaje y saneamiento; prevenir y controlar la contaminación de las aguas que tenga asignadas para la prestación del servicio; prevenir y controlar la contaminación de las aguas que se descargan en los sistemas de drenaje y alcantarillado en los centros de población; **el saneamiento de las aguas residuales, el reuso y comercialización de las mismas y las verificaciones e inspecciones necesarias para alcanzar sus objetivos**, procurando la universalidad y continuidad del servicio así como la igualdad y equidad en la atención a los usuarios.

Mientras que los numerales 6, 7, 8, 121, 122 y 123 de la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del Estado de Guanajuato, le otorgan al titular del **Poder Ejecutivo del Estado**, al **Ayuntamiento del Municipio de Guanajuato** y a la **Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato**, las siguientes obligaciones relacionadas con la protección al medio ambiente:

Artículo 60.- Corresponde al Ejecutivo del Estado:

I.- Formular, conducir y evaluar la política ambiental estatal;

II.- Aplicar los instrumentos de política ambiental, así como la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente que se realice en bienes y zonas de jurisdicción estatal;

III.- Formular, ejecutar y evaluar las estrategias que en materia de protección al ambiente se integren en el Programa de Gobierno del Estado y en aquéllos derivados del mismo;

IV.- Prevenir y controlar la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas que funcionen como establecimientos industriales, así como por fuentes móviles, que no sean de competencia Federal;

V.- Regular las actividades que no sean consideradas altamente riesgosas para el ambiente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente;

VI.- Declarar, regular, administrar y vigilar las áreas naturales protegidas y zonas de restauración ecológica previstas en esta Ley, con la participación de los ayuntamientos;

VII.- Regular los sistemas de recolección, transporte, almacenamiento, manejo, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos e industriales que no estén considerados como peligrosos, de conformidad con lo dispuesto por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente;

VIII.- Prevenir y controlar la contaminación generada por la emisión de ruido, vibraciones, energía térmica, lumínica, radiaciones electromagnéticas y olores perjudiciales al equilibrio ecológico o al ambiente, provenientes de fuentes fijas que funcionen como establecimientos industriales, así como en su caso, de fuentes móviles que no sean de competencia Federal;

IX.- Regular el aprovechamiento sustentable y la prevención y control de la contaminación de las aguas de jurisdicción estatal;

X.- Prevenir y controlar la contaminación generada por el aprovechamiento de las sustancias no reservadas a la Federación, que constituyan depósitos de naturaleza similar a los componentes de los terrenos que sólo puedan utilizarse para la fabricación de materiales para la construcción u ornamento de obras;

XI.- Atender los asuntos que afecten el equilibrio ecológico o el ambiente de dos o más municipios;

XII.- Participar en emergencias y contingencias ambientales, conforme a las políticas y programas de protección civil que al efecto se establezcan;

XIII.- Coadyuvar en la vigilancia del cumplimiento de las normas oficiales mexicanas expedidas por la Federación, en las materias y supuestos a que se refieren las fracciones IV, VII y VIII de este artículo;

XIV.- Conducir la política estatal de información y difusión en materia ambiental;

XV.- Promover la participación de la sociedad en materia ambiental, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley; XVI.- Evaluar el impacto ambiental de las obras o actividades que no se encuentren expresamente reservadas a la Federación, y en su caso, expedir las autorizaciones correspondientes;

XVII.- Atender de manera coordinada con la Federación los asuntos que afecten tanto el equilibrio ecológico del Estado, como el de otras entidades federativas, cuando éstas así lo acuerden;

XVIII.- Ejercer las funciones que en materia de preservación del equilibrio ecológico y protección al ambiente transfiera la Federación al Estado, conforme a lo dispuesto por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente;

XIX.- Expedir los reglamentos de esta Ley, las normas técnicas ambientales, los listados de actividades riesgosas y demás normatividad complementaria para el correcto ejercicio de sus atribuciones; y

XX.- Regular y controlar la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y su hábitat;

XXI.- Integrar un registro de emisiones y transferencia de contaminantes al aire, agua, suelo y subsuelo, materiales y residuos de su competencia;

XXII.- Participar con la Federación en la integración del Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales; y

XXIII.- Atender los demás asuntos que en materia de preservación del equilibrio ecológico y protección al ambiente les conceda esta Ley y otros ordenamientos en concordancia con ella y que no estén otorgados expresamente a la Federación.

Artículo 7o.- Corresponde a los ayuntamientos:

I.- Formular, conducir y evaluar la política ambiental municipal;

II.- Formular, ejecutar y evaluar el programa municipal de protección al ambiente;

III.- Aplicar los instrumentos de política ambiental previstos en esta Ley y preservar y restaurar el equilibrio ecológico y la protección al ambiente en bienes y zonas de jurisdicción municipal, en las materias que no estén expresamente conferidas a la Federación o al Estado;

IV.- Establecer los sitios de disposición final de los residuos sólidos urbanos e industriales que no sean peligrosos;

V.- Aplicar las disposiciones jurídicas que se expidan en el Estado en materia ambiental, relativas a la prevención y control de la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas que funcionen como establecimientos mercantiles o de servicios, así como emisiones de contaminantes a la atmósfera provenientes de fuentes móviles que no sean consideradas de jurisdicción federal, con la participación que de acuerdo a esta Ley corresponda al Estado;

VI.- Aplicar las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control de los efectos sobre el ambiente ocasionados por la generación, transporte, almacenamiento, manejo, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos municipales e industriales que no estén considerados como peligrosos, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente;

VII.- Crear y administrar zonas de preservación ecológica en los centros de población, parques urbanos, jardines públicos y demás previstas en esta Ley;

VIII.- Participar en los programas nacionales de reforestación;

IX.- Aplicar las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control de la contaminación por ruido, vibraciones, energía térmica, radiaciones electromagnéticas y lumínica y olores perjudiciales para el equilibrio ecológico y el ambiente, proveniente de fuentes fijas que funcionen como establecimientos mercantiles o de servicios, así como la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones que, en su caso, resulten aplicables a las fuentes móviles excepto las que sean consideradas de jurisdicción federal;



X.- Aplicar las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la contaminación de las aguas que se descarguen en los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de población, con la participación que corresponda al Ejecutivo del Estado conforme a los convenios de coordinación que se celebren;

XII.- Preservar y restaurar el equilibrio ecológico y la protección al ambiente en los centros de población, en relación con los efectos derivados de los servicios de alcantarillado, limpia, mercados, centrales de abasto, panteones, rastros, tránsito y transporte locales, siempre y cuando no se trate de facultades otorgadas a la Federación o al Estado;

XIII.- Participar en la atención de los asuntos que afecten el equilibrio ecológico de dos o más municipios, que generen efectos ambientales en su circunscripción territorial;

XIV.- Participar en emergencias y contingencias ambientales conforme a las políticas y programas de protección civil que al efecto se establezcan;

XV.- Coadyuvar con las autoridades federales en la vigilancia para el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas expedidas por la Federación, en las materias y supuestos a que se refieren las fracciones V, VI, IX y X de este artículo;

XVI.- Formular y conducir la política municipal de información y difusión en materia ambiental;

XVII.- Participar en la evaluación del impacto ambiental de obras o actividades de competencia estatal, cuando las mismas se realicen en el ámbito de su circunscripción territorial, de conformidad con lo previsto por esta Ley y su reglamento;

XVIII.- Participar con el Estado en la instrumentación y operación de sistemas y programas para el mejoramiento de la calidad del aire, así como en las acciones para el monitoreo atmosférico;

XIX.- Establecer medidas para limitar o impedir la circulación dentro de la zona urbana municipal de los vehículos automotores, cuyos niveles de emisión de contaminantes a la atmósfera rebasen los límites máximos permisibles que determinen los reglamentos y normas oficiales mexicanas correspondientes;

XX.- Reducir los niveles de emisión de contaminantes de los vehículos automotores, aplicando las medidas conducentes para ello;

XXI.- Integrar y actualizar el registro municipal de fuentes, emisiones y transferencia de contaminantes de su competencia y coadyuvar en la integración y actualización del registro de fuentes, emisiones y transferencia de contaminantes del Estado;

XXII.- Elaborar informes periódicos sobre el estado que guarda el medio ambiente en el Municipio correspondiente;

XXIII.- Implantar y operar sistemas municipales para el tratamiento de aguas residuales de conformidad con las normas oficiales mexicanas, normas técnicas ambientales y demás disposiciones jurídicas aplicables;

XXIV.- Llevar y actualizar el registro municipal de las descargas a las redes de drenaje y alcantarillado que administren, cuyos datos serán integrados al Registro Nacional de Descargas;

XXV.- Expedir los reglamentos para el cumplimiento de las atribuciones que le otorga esta Ley; y

XXVI.- Celebrar convenios de coordinación con el Estado para que éste realice actividades o ejerza facultades en bienes y zonas de jurisdicción municipal, en las materias de esta Ley, siempre que el Municipio no cuente con la infraestructura necesaria para ejercer sus atribuciones;

XXVII.- Participar con la Federación en la integración del Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales; y

XXVIII.- Atender los demás asuntos que en materia de preservación del equilibrio ecológico y protección al ambiente les conceda esta Ley y otros ordenamientos en concordancia con ella y que no estén otorgados expresamente a la Federación o al Estado.

Artículo 8o.- La Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial tendrá además de las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato, las siguientes:

I.- Evaluar el impacto ambiental que pueda causar la realización de obras, actividades públicas o privadas que no se encuentran reservadas a la Federación y emitir la resolución correspondiente;

II.- Promover la participación y responsabilidad de la sociedad en la formulación y aplicación de la política ambiental; así como en acciones

de información, difusión y vigilancia del cumplimiento de la normatividad;

III.- Mantener un sistema permanente de información sobre los ecosistemas y su equilibrio;

IV.- Establecer en coordinación con los municipios, los criterios ecológicos para la planeación, definiendo las zonas aptas para mantener una relación de equilibrio entre recursos, población y factores económicos;

V.- Promover la educación ambiental y la conciencia ecológica en la sociedad;

VI.- Proponer al Titular del Poder Ejecutivo el establecimiento de las medidas de protección de áreas naturales en el Estado en coordinación con la Federación, y los ayuntamientos;

VII.- Determinar y publicar el listado de actividades que no sean consideradas altamente riesgosas en materia ambiental en el Estado, en términos de esta Ley;

VIII.- Asesorar a los municipios en la creación de programas para el control de la contaminación;

IX.- Promover la capacitación en materia de protección al ambiente a través de convenios con instituciones y organizaciones de los sectores público, social y privado;

X.- Promover y apoyar mecanismos de financiamiento para la protección y restauración del ambiente;

XI.- Regular con fines ecológicos, la explotación y aprovechamiento de los minerales o sustancias no reservadas a la Federación y las que constituyan depósitos de naturaleza semejante a los componentes de los terrenos, que sólo puedan utilizarse para la fabricación de materiales para la construcción u ornamento;

XII.- Regular las áreas que tengan un valor escénico o de paisaje, para protegerlas de la contaminación visual;

XIII.- Fomentar la investigación de nuevas tecnologías en materia ecológica;

XIV.- Establecer normas técnicas ambientales que deberán observarse en el desarrollo de actividades que causen o puedan causar desequilibrio ecológico o daños al ambiente en el Estado, considerando las propuestas de la población en su elaboración y actualización;

XV.- Elaborar y ejecutar criterios, estudios, programas, proyectos, acciones, obras e inversiones para la protección, defensa y restauración del ambiente;

XVI.- Integrar y mantener actualizado el inventario de fuentes fijas de contaminación ubicadas en el territorio de la Entidad; actualización;

XVII.- Proponer al Ejecutivo del Estado la celebración de acuerdos y convenios para el establecimiento de programas que permitan el ahorro de energía y su utilización eficiente, conforme a los principios establecidos en la presente Ley; y

XVIII.- Las demás que le otorgue esta Ley y otras disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 121.- En materia de prevención y control de la contaminación del agua, corresponde al Ejecutivo del Estado y a los ayuntamientos en el ámbito de sus respectivas competencias:

I.- Controlar las descargas de aguas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado;

II.- Coadyuvar en la vigilancia de las normas oficiales mexicanas y vigilar la aplicación de las normas técnicas ambientales correspondientes, así como requerir a quienes generen descargas a dichos sistemas y no cumplan con éstas, la instalación de sistemas de tratamiento; y

III.- Llevar y actualizar el registro de las descargas a los sistemas de drenaje y alcantarillado que administren, el que será integrado al registro nacional de descargas a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca.

Artículo 122.- Es competencia del Ejecutivo del Estado y de los ayuntamientos, para evitar la contaminación del agua de jurisdicción estatal:

I.- Las descargas de origen industrial o agropecuario que viertan al alcantarillado municipal o a cualquier cuerpo receptor de aguas de jurisdicción estatal;

II.- Las descargas de origen municipal y su mezcla incontrolada con otras que se viertan a cuerpos receptores de aguas de jurisdicción estatal;



- III.- Las descargas de desechos, sustancias o residuos generados en actividades de extracción de recursos no renovables; y
- IV.- El vertimiento de residuos sólidos no peligrosos en cuerpos y corrientes de agua.

Artículo 123.- Las aguas residuales que se descarguen en los sistemas de drenaje y alcantarillado de poblaciones y demás depósitos o corrientes de agua de jurisdicción estatal deberán reunir las condiciones necesarias para prevenir:

- I.- La contaminación de los cuerpos receptores;
- II.- La interferencia en los procesos de depuración de las aguas; y
- III.- Los trastornos, impedimentos o alteraciones en los correctos aprovechamientos o en el funcionamiento adecuado de los sistemas, así como de los sistemas de alcantarillado.

De lo anterior puede concluirse que las autoridades responsables cuentan con la obligación constitucional y legal de garantizar a los ciudadanos la prestación del servicio público de drenaje, tratamiento y disposición de las aguas residuales, el que deberá adaptarse a las disposiciones ambientales que garanticen su funcionamiento adecuado con el fin de evitar problemas sanitarios a la población.

En relación con el derecho a un medio ambiente sano de todas las personas, el quinto párrafo del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que **"Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley."**

Prerrogativa que también se encuentra tutelada en el ámbito internacional, en la medida que nuestro país es parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y su Protocolo Adicional (Protocolo San Salvador), en cuyo artículo 11 que se reconoce que toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y contar con servicios públicos básicos, así como que los Estados Parte promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente.

A su vez, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 641/2017, se pronunció sobre el derecho humano a un ambiente en sano, en el que señaló que este derecho se presenta en dos vertientes:

La primera, como la obligación del estado de garantizar el medio ambiente sano y su tutela jurisdiccional:

Y la segunda, como la responsabilidad del Estado y los ciudadanos para su preservación y restauración.

Por lo que el derecho humano a un medio ambiente sano no es solo una norma programática, sino que cuenta con plena eficacia legal, erigiéndose como un mandato concreto a las autoridades para que garanticen a la población un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar.

Además, destacó que los esfuerzos del ser humano por mejorar el medio en que habita y elevar su nivel de vida, **dependen en gran medida de la disponibilidad de agua, existiendo una correlación esencial entre la calidad del agua, derecho a un medio ambiente sano y salud pública, por lo que la prevención y control de la contaminación del agua deberá ser fundamental para evitar que se reduzca su disponibilidad y así proteger los ecosistemas del país.**

De ahí que el aprovechamiento sustentable, la preservación y la restauración del agua, el control de contaminación, son una meta prioritaria del Estado, en tanto que resultan indispensables para que las personas puedan alcanzar un nivel de vida adecuado y digno, así como obtener beneficios económicos.

Agregó que la debida regulación, monitoreo y tratamiento de las aguas residuales es uno de los problemas ecológicos que requieren más atención del Estado, pues de no gestionarse adecuadamente, las aguas residuales

constituyen un peligro tanto para el medio ambiente como para la salud de los seres humanos ya que los daños a la integridad de los ecosistemas repercuten inevitablemente en la salud y el bienestar de las personas.

Finalmente, señaló que la contaminación en gran escala del agua en ocasiones tiene efectos directos y visibles, pero con mayor frecuencia su impacto es invisible y solo se hace patente a largo plazo; es por ello que la gestión inadecuada de las aguas residuales limita el desarrollo, pone en peligro los medios de vida y aumenta la pobreza, al incrementar los gastos de atención de la salud y reducir la productividad y las oportunidades educativas.

Trasladado lo anterior al caso que nos ocupa, se tiene que los quejosos manifiestan en su demanda que acuden en defensa de un **interés legítimo**, en virtud de su especial posición frente al orden público.

Al respecto, indican que tienen su domicilio ubicado en calle **Cocona**, número **16-A**, fraccionamiento **Manantial**, en esta ciudad, lo que acreditan con la documental que adjuntan a su escrito aclaratorio, y que desde el catorce de noviembre de dos mil veintidós, realizan caminatas diarias, con motivo de esparcimiento, sobre el Río Guanajuato, **manifestando bajo protesta de decir verdad**, que al pasar por un costado del referido cause de agua, apreciaron con sus sentidos de vista y olfato que el agua del río era de color verde oscuro y huele a excremento humano, además de que la Planta Tratadora de Aguas Residuales Centro, no se encontraba funcionando con normalidad, y que las autoridades señaladas como responsables de forma diaria, constante, continua y permanente descargan aguas residuales sin tratar y sin cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-2021 y/o las Normas Oficiales Mexicanas aplicables, que establecen los límites permisibles de descargas de aguas residuales, lo que se traduce en la contaminación del Río Guanajuato, ubicado en esta ciudad.

Lo anterior, resulta suficiente para dar por sentado el interés suspensivo de los quejosos en el presente asunto, al demostrarse que pueden verse afectados a partir de los actos reclamados, los cuales, les impiden transitar y disfrutar de un medio ambiente sano.

Por tal motivo, si la concesión de la medida cautelar solicitada no generará perjuicios al interés social ni contravendrá disposiciones de orden público, además que tampoco existe un interés colectivo que pueda verse perjudicado con la medida, es factible concluir que debe concederse la suspensión provisional.

Máxime, cuando en el caso como el que nos ocupa el interés social adquiere una especial relevancia, puesto que es evidente e incuestionable que la sociedad está interesada en el establecimiento de medidas que, precisamente, afronten y den respuesta a los problemas ecológicos relacionados con el tratamiento de las aguas, lo cual no solo traería un beneficio al peticionario, sino a todos los habitantes de la zona al garantizar un medio ambiente sano para que puedan desarrollarse y cuenten con bienestar.

En consecuencia, con fundamento en los artículos 128, 138 y 147 de la Ley de Amparo, **se concede la suspensión provisional solicitada**, hasta en tanto se resuelva sobre la definitiva, **para que las autoridades responsables, realicen lo siguiente:**

- Deberán ejercer sus atribuciones legales y constitucionales para que adopten las medidas necesarias a fin de **controlar, prevenir y reparar las descargas de las aguas residuales** en el Río Guanajuato (con ubicación en las coordenadas geográficas **20.996445, -101.287799**).

Es así, pues concluir en sentido contrario, sería secundar una conducta ilegal y contribuir al desacato de la ley, sin que sea justificable esperar a que se resuelva en el fondo el juicio de amparo para que las autoridades, hasta ese entonces, procedan a cumplir con algo a lo que ya se encuentran obligadas.

Sirve de apoyo a lo anterior la tesis IV.1o.A. J/38 (10a.) visible en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, mayo de 2018, libro 54, tomo III, página 2372 de rubro y texto siguientes:



"SUSPENSIÓN. EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LA LEY LE IMPONE, PROCEDE CONCEDERLA.

Cuando en el amparo se reclama el inejercicio de las facultades de la autoridad administrativa y esa conducta omisiva refleja una actitud de indiferencia ante el cumplimiento de las obligaciones que la ley le impone, pues abandona o deja de prestar el servicio público encomendado y soslaya el bienestar social que supone observar ese deber, en una apariencia del buen derecho, procede conceder la suspensión solicitada, para el efecto práctico de vencer la abstención y obligar a la autoridad a acatar lo que la ley le ordena, máxime si con ello se pretende evitar un daño al orden público o al interés social, ocasionado precisamente por el incumplimiento a su obligación. Concluir en sentido contrario, sería secundar una conducta ilegal y contribuir al desacato de la ley, sin que sea justificable esperar a que se resuelva en el fondo el juicio de amparo para que la autoridad, hasta ese entonces, proceda a cumplir con algo a lo que siempre estuvo obligada."

En el entendido de que la suspensión concedida surte efectos desde luego, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 136 de la Ley de Amparo; sin que en el caso sea necesario la fijación de garantía alguna, pues no se advierte que con la concesión de la medida se afecten derechos de terceros.

REQUERIMIENTO DE INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA SUSPENSIÓN.

Con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo, a fin de estar en condiciones de pronunciarse sobre la suspensión definitiva, requiérase a las autoridades responsables para que en el plazo de tres días, contado a partir de la notificación del presente acuerdo, rindan un informe relativo al cumplimiento de la suspensión provisional, el cual deberán presentar de forma independiente al previo, y en el que precisaran las acciones realizadas a fin de acatar la medida aquí decretada, debiendo remitir copia certificada de las constancias que acrediten ese actuar.

En el entendido que, de ser omisas en presentar dicho informe, con fundamento en la fracción I del artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo, se les podrá imponer como medio de apremio multa de **CINCUENTA** Unidades de Medida y Actualización.⁶

Cítese a las partes a la audiencia incidental, la cual tendrá verificativo a las **NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DOS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS.**

NO GIRAR COMUNICACIÓN DE NUEVO SEÑALAMIENTO DE AUDIENCIA INCIDENTAL.

Sin que sea necesario girar oficio a la autoridad responsable a fin de notificar el señalamiento de nueva hora y fecha para el desahogo de la audiencia incidental, pues dicha determinación carece de trascendencia y por tanto, no amerita la notificación personal a la que equivale una comunicación mediante oficio, de ahí que, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia condigna, la hora y fecha que nuevamente se señale para ese efecto, se podrá consultar en la página de internet <http://www.dgepj.cjf.gob.mx/interinternet/acuerdo/auerdini.asp>.

Es aplicable la jurisprudencia 2a./J.176/2012 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se localiza en la página 1253, libro XVI, Tomo 2, enero de dos mil trece, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto:

"NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS."

DOMICILIO PARA OÍR NOTIFICACIONES.

Atento a lo solicitado en la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, fracción IV, y 30, ambos de la Ley de Amparo, se

⁶ De conformidad a lo dispuesto en el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación de salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en correlación con la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización.

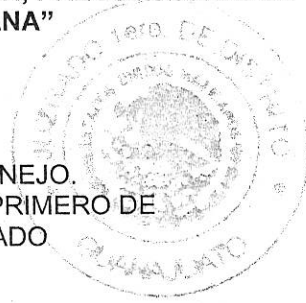
ordena que se le realicen las notificaciones via electrónica, bajo los datos de Firma Electrónica (FIREL) con nombre de usuario: **oscar.aguayo**.

Notifíquese.

Así lo proveyó y firma **Luis Alfredo Gómez Canchola**, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato, quien actúa asistido de **Mariana Torres Cornejo**, Secretaria que autoriza y da fe.”- **DOS FIRMAS ILEGIBES.**

ATENTAMENTE
GUANAJUATO, GUANAJUATO, 25 DE NOVIEMBRE DE 2022
“2022, AÑO DE RICARDO FLORES MAGÓN, PRECURSOR DE LA
REVOLUCIÓN MEXICANA”

MARIANA TORRES CORNEJO.
SECRETARIA DEL JUZGADO PRIMERO DE
DISTRITO EN EL ESTADO



Así, a la postura sostenida tradicionalmente del crecimiento económico a cualquier precio, le ha seguido una idea más integral de desarrollo, que no atiende sólo al aspecto económico, sino que considera otros elementos, tales como la dimensión humana de la economía y la dimensión medio ambiental. El paradigma de esta concepción es la idea del **"desarrollo sustentable"**.

El hombre es a la vez obra y artífice del medio ambiente que lo rodea, el cual le da el sustento material y le brinda la oportunidad de desarrollarse intelectual, moral, social y espiritualmente. En la larga evolución de la raza humana, se ha llegado a una etapa en que, gracias a la rápida aceleración de la ciencia y la tecnología, el hombre ha adquirido el poder de transformar de innumerables maneras y en una escala sin precedentes, cuanto lo rodea. Así, los dos aspectos del medio ambiente humano, el natural y el artificial **"son esenciales para el bienestar del hombre y para el goce de los derechos humanos fundamentales, incluso el derecho a la vida misma"**

En el entendido de que, a virtud de las reformas realizadas al artículo 4 constitucional, el Constituyente Permanente reconoció que **"las condiciones ambientales en un ecosistema influyen directamente en la salud de quienes lo habitan"** por lo que buscó definir un parámetro objetivo respecto de las condiciones de desarrollo y bienestar que el Estado tiene la obligación de garantizar a sus ciudadanos, y la responsabilidad que tienen éstos de participar, aunque de manera diferenciada, en la salvaguarda de tal derecho fundamental, por lo que se estableció la responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo que establezca el legislador secundario.

Es decir, el derecho humano a un medio ambiente sano presenta su teleología en dos vertientes: (I) como la obligación del Estado de garantizar el pleno ejercicio de ese derecho y su tutela jurisdiccional; y (II) como la responsabilidad, aunque diferenciada, del Estado y la ciudadanía para su preservación y restauración.

En ese sentido, fue la intención expresa del Constituyente Permanente que el derecho fundamental a un medio ambiente sano no se limitara a ser **"una norma programática"**, sino que contara con **plena eficacia legal**, es decir, que se traduzca en un mandato concreto para la autoridad, consistente en garantizar a la población un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar.

En esa lógica, el derecho fundamental en referencia no puede concebirse meramente como **"buenos deseos constitucionalizados"** ni como **"poesía constitucional"**, en tanto **goza de una verdadera fuerza jurídica** que vincula a la autoridad para asegurar tales condiciones ambientales y, en consecuencia, ante ese mandato constitucional, los tribunales de nuestro país se encuentran posibilitados para revisar si, efectivamente, las acciones u omisiones de la autoridad resultan conformes a la plena realización del derecho humano al medio ambiente sano.

Precisado lo anterior, la recopilación de fuentes convencionales en la materia permite colegir que los Estados **"tienen la obligación de proteger [a las personas] contra los daños ambientales que interfieran en el disfrute de los derechos humanos"**. Aunque los límites de las obligaciones ambientales específicas siguen evolucionando, algunas de sus características principales ya están claras. Concretamente, los Estados están obligados a: (I) adoptar **"y aplicar marcos jurídicos para proteger contra daños ambientales"** que puedan vulnerar los derechos humanos, y (II) **"regular a los agentes privados"** para proteger contra esos daños.

En efecto, una vez que un Estado haya adoptado normas medioambientales en su legislación, deberá aplicarlas y cumplirlas, pues **"una reglamentación que pretenda proteger derechos garantizados sería una medida ilusoria si no fuese observada debidamente"**. Esto es, no basta con adoptar medidas **"si estas medidas sólo quedan en el papel y no van acompañadas de medidas adicionales y concretas destinadas a impedir que se produzcan daños [...] y la reparación efectiva del daño ambiental ocasionado"**.

En este respecto, huelga decir que los esfuerzos del hombre por mejorar el medio en que habita y elevar su nivel de vida, **dependen en gran medida de la disponibilidad de agua, existiendo una correlación esencial entre la calidad del agua, derecho a un medio ambiente sano y salud pública**.

La prevención y control de la contaminación del agua, **"es fundamental para evitar que se reduzca su disponibilidad y para proteger los ecosistemas del país"**. En ese sentido, el aprovechamiento sustentable, la preservación y, en su caso, la restauración del agua, de manera que sean compatibles la obtención de beneficios económicos y las actividades de la sociedad con la preservación de los ecosistemas, así como la prevención y el control de la contaminación de tal recurso natural, son una meta prioritaria del Estado, en tanto resultan indispensables para que las personas puedan alcanzar un nivel de vida adecuado y digno.

Así, para frenar eficazmente la contaminación del agua, **"deben aplicarse reglamentos en todos los sectores y todo el país"**, dando prioridad a la eliminación de los problemas más urgentes y graves. En tal sentido, no puede soslayarse que la salubridad del agua es un componente central de los derechos humanos, y por ende, uno de los problemas ecológicos que requieren más atención por parte del Estado, es precisamente, **la debida regulación, monitoreo y tratamiento de las "aguas residuales"**.

Las aguas residuales pueden definirse como una combinación de fluidos efluentes domésticos compuestos por aguas negras -que contienen materia fecal-, aguas grises -procedentes de cocinas y baños-; aguas procedentes de establecimientos comerciales e instituciones, incluidos hospitales; efluentes industriales, agua de lluvia y otras escorrentías urbanas; y efluentes agrícolas, hortícolas y acuícolas, con materia disuelta o en suspensión. Debe entenderse que las aguas residuales no sólo incluyen las aguas cloacales, sino también los lodos fecales y residuos sépticos procedentes de letrinas de pozo y tanques sépticos.

Los problemas derivados de la contaminación exigen que se hagan esfuerzos concertados **"para lograr la gestión sostenible de las aguas residuales y luchar contra la contaminación sobre la base de los derechos humanos"**. El hecho de que no se gestionen las aguas residuales de una persona afecta principalmente a los medios de vida y la salud de otras.

En efecto, **"los grandes volúmenes de aguas residuales no tratadas comprometen la disponibilidad de agua apta para el consumo"**. La contaminación del agua también pone en peligro el disfrute de otros derechos humanos. Cuando no se gestionan, las

aguas residuales "constituyen un peligro tanto para el medio ambiente como para la salud de los seres humanos [...] ya que los daños a la integridad de los ecosistemas repercuten inevitablemente en la salud y el bienestar de las personas". Muchas de las llamadas enfermedades relacionadas con el agua, son en realidad enfermedades de origen fecal transmitidas por el contacto con agua contaminada con heces fecales o por su ingestión.

Al respecto, debe destacarse que, acorde con la Relatora Especial sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento, del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, las enfermedades relacionadas con el agua "representan una gran parte de la carga mundial de morbilidad, y más personas mueren a causa de aguas contaminadas que en guerras o por otras formas de violencia".

La contaminación en gran escala en ocasiones tiene efectos directos y visibles, pero con mayor frecuencia "el impacto de una gestión inadecuada de las aguas residuales y de la contaminación de las aguas es invisible y solo se hace patente a largo plazo". La gestión inadecuada de las aguas residuales limita el desarrollo, pone en peligro los medios de vida y aumenta la pobreza, al incrementar los gastos de atención de la salud y reducir la productividad y las oportunidades educativas

Al respecto, la Junta Asesora sobre Agua y Saneamiento establecida por el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, en una reunión informativa celebrada en enero de dos mil trece, declaró que, para que los ciudadanos y los países "puedan disfrutar de los beneficios que reportan un saneamiento adecuado y el agua potable para la salud, el crecimiento económico y la dignidad humana [es] preciso adoptar un enfoque holístico, que incorpor[e] la recogida de aguas residuales y su tratamiento y reutilización".

Debido a las implicaciones negativas que tiene la contaminación del agua ante el público, "es imprescindible formular objetivos específicos relacionados con las aguas residuales". Las propuestas actuales muestran una tendencia a fijar objetivos que abarcan varios aspectos: (I) prevenir la contaminación; (II) "reducir los efectos de la contaminación mediante la recogida y el tratamiento"; y (III) reutilizar las aguas residuales. Desde la perspectiva de los derechos humanos, resulta fundamental integrar los intereses de los más desfavorecidos y los más afectados por la contaminación del agua.

En efecto, la gestión inadecuada de aguas residuales "puede poner en peligro el acceso de los usuarios que se encuentran corriente abajo al agua para beber o para riego". La contaminación del agua a menudo "afecta mucho más a las comunidades más pobres que a otras, pues la falta de infraestructura las obliga a utilizar fuentes insalubres"

La inversión en la gestión de las aguas residuales está estrechamente ligada a las opciones tecnológicas, empero, las necesidades de financiación no se limitan a la infraestructura, sino que "abarcan la gestión, la vigilancia, la formulación de políticas, la creación de capacidad, la sensibilización y la aplicación"

En el entendido que prestar una mayor atención a la gestión de las aguas residuales desde una perspectiva de derechos humanos no implica, necesariamente, que todos deban estar conectados a instalaciones de tratamiento de aguas residuales, ni que de la noche a la mañana deba emprenderse la gestión adecuada de las aguas residuales.

Con arreglo al marco de derechos humanos, las medidas y tecnologías que se adopten incluidas las soluciones de saneamiento, deben ser apropiadas para cada contexto dado y acorde a las obligaciones jurídicas que impongan las leyes internas, y esas medidas han de adoptarse gradualmente para avanzar por etapas.

Empero, ello en forma alguna implica pasividad o permisividad para que los Estados se abstengan de tratar las aguas residuales y proteger a las personas contra los efectos adversos que puedan generar, por el contrario, deben avanzar de la forma más ágil y eficaz posible para "garantizar el acceso a servicios de saneamiento seguros, asequibles y aceptables para todos, que proporcionen intimidad y preserven la dignidad". Esto requiere medidas "deliberadas, concretas y orientadas hacia la plena realización", en particular con miras a crear un entorno propicio para que las personas ejerciten sus derechos relacionados con el saneamiento.

Diversos organismos de derechos humanos han entendido, por tanto, que en términos amplios el saneamiento de las aguas "incluye el tratamiento y la eliminación o reutilización de excrementos y las aguas residuales asociadas". El saneamiento "se puede definir como un sistema para la recogida, el transporte, el tratamiento y la eliminación o reutilización de excrementos humanos y la correspondiente promoción de la higiene".

Las obligaciones primordiales en materia de derechos humanos relacionadas con el saneamiento del agua "incumben al Estado, y este debe garantizar que los agentes no estatales, incluidas las personas, no pongan en peligro el disfrute de los derechos humanos". El Estado "debe asumir una función crucial", y está obligado en virtud de la legislación sobre derechos humanos, a sensibilizar a la población sobre los beneficios del saneamiento.

Los Estados cuentan con una obligación de "proteger" el derecho humano a un medio ambiente sano, lo cual exige no sólo que se abstengan de realizar actos contaminantes, sino primordialmente, que tomen acciones positivas, concretas y deliberadas tendientes a tutelar tal derecho de manera eficaz y con miras a su plena realización.

Dicho mandato, en tratándose de la protección ecológica de las aguas, implica que asuma las siguientes conductas: (I) proteger la prestación de servicios de agua y saneamiento; (II) proteger "los recursos o infraestructura necesarios contra la contaminación o la injerencia", y (III) proteger al ambiente y a los recursos hídricos contra las conductas indebidas de los actores no estatales.

TERCERO. - La descarga tanto de aguas residuales como de residuos al Río Guanajuato, *constituyen un factor relevante de contaminación que ha afectado gravemente la calidad y salubridad de tales aguas.* Al respecto, se reitera que cuando no se gestionan, las aguas residuales "constituyen un peligro tanto para el medio ambiente como para la salud de los seres humanos [...] ya que los daños a la integridad de los ecosistemas repercuten inevitablemente en la salud y el bienestar de las personas".

Asimismo, "los grandes volúmenes de aguas residuales no tratadas comprometen la disponibilidad de agua apta para el consumo"; por lo que las autoridades responsables debieron: (I) prevenir la contaminación por aguas residuales; (II) "reducir los efectos de la contaminación mediante la recogida y el tratamiento"; y (III) en su caso, reutilizar las aguas residuales mediante sistema de tratamiento.

A mayor abundamiento, es de destacar que en nuestro sistema jurídico existen parámetros objetivos respecto al tratamiento de aguas residuales que debieron observar las autoridades responsables para combatir y controlar la contaminación de las aguas del Río Guanajuato como lo son las disposiciones normativas previstas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato, Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del Estado de Guanajuato, que conjuntamente, constriñen a las autoridades a emprender una serie de acciones a fin de evitar la contaminación del Río Guanajuato, y vigilar que las descargas residuales cumplan con las Normas Oficiales Mexicanas en la materia, situación, que hasta la fecha no se está haciendo.

CUARTO. – Debe de considerarse, que en caso de que las autoridades responsables nieguen su acción y participación activa en las afectaciones y contaminación del Río Guanajuato. No debe perderse de vista que el derecho humano a un medio ambiente sano no se limita a evitar que el Estado, a través de alguno de sus agentes, realice actos contaminantes o que ponga en riesgo, directamente la sustentabilidad de los ecosistema, es decir tal derecho no se agota con el simple mandato de que el Estado se abstenga de afectar el ambiente, sino que, desde luego, conlleva también la diversa obligación de tomar todas las medidas positivas tendientes a proteger tal derecho contra los actos de agentes no estatales que lo pongan en peligro.

En efecto, en tratándose del derecho humano en comento, los grandes problemas y riesgos a la protección del ambiente derivan, precisamente, de las conductas que puedan adoptar los particulares, y por ende, en dicha materia resulta indispensable que el Estado vigile el cumplimiento de las normas ambientales y, en su caso, sancione o limite las acciones de los particulares; de otro modo, se vaciaría de contenido el derecho humano a un medio ambiente sano.

Esto es, el Estado no sólo debe abstenerse de adoptar medidas que supongan una amenaza o denegación del acceso de las personas a un medio ambiente sano -obligación de "respetar"-, sino que debe asegurarse que los agentes no estatales actúen de conformidad con las disposiciones relevantes que se han emitido para tutelar tal derecho fundamental, es decir, debe ejercer sus funciones de fiscalización a fin de salvaguardar el equilibrio ecológico -obligación de "proteger"-.

El Estado no puede adoptar una postura de pasividad cuando los particulares se encuentren realizando actos que afecten negativamente al medio ambiente y a los derechos humanos que se deriven de la pérdida de la sustentabilidad y salvaguarda de los ecosistemas; por el contrario, el Estado debe asegurarse que en todas las esferas, y acorde al ámbito competencial previsto por el Constituyente Permanente, se proteja tal derecho fundamental, lo cual conlleva que, ante conductas infractoras por parte de particulares, no pueda simplemente "cruzarse de brazos". Como erróneamente lo está haciendo hasta ahora, lo que se estima indebido.

La obligación del Estado de vigilar que los actos de los particulares se adecuen al paradigma del desarrollo sustentable, desde la perspectiva de los derechos humanos, es clara. En efecto, "el deber del Estado de ofrecer protección contra los abusos cometidos por agentes no estatales forma parte del fundamento mismo del régimen internacional de derechos humanos". Este deber exige que el Estado asuma una función esencial de regulación y arbitraje de las conductas de los particulares que afecten indebidamente el medio ambiente.

En los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos aprobados por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, en dos mil once, se afirmó que los Estados deben, entre otras cosas, "proteger contra las violaciones de los derechos humanos cometidas en su territorio y/o su jurisdicción por terceros", por ejemplo adoptando "medidas apropiadas para prevenir, investigar, castigar y reparar esos abusos mediante políticas adecuadas, actividades de reglamentación y sometimiento a la justicia".

Muchos otros órganos de derechos humanos han vinculado expresamente el deber de los Estados de proteger contra las violaciones de los derechos humanos cometidas por actores no estatales con las violaciones resultantes de la contaminación u otros daños ambientales. Por ejemplo, en el contexto del derecho al agua, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha dejado claro que el deber de proteger este derecho se "extiende a la adopción y aplicación de medidas eficaces para impedir que terceros vulneren este derecho mediante la contaminación de las fuentes de agua".

En efecto, los gobiernos tienen el deber de proteger a sus ciudadanos, no solo mediante una legislación adecuada aplicada de manera efectiva, sino también ofreciendo protección contra posibles actuaciones nocivas de agentes privados, pues el permitir que terceros puedan incidir de manera desmedida en el medio ambiente, no se encuentra a la altura de la conducta mínima esperada de un gobierno.

Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que "la implementación efectiva de [...] normas de protección ambiental frente a particulares [...] es requerida para evitar que el Estado sea internacionalmente responsable por violación de los derechos humanos de las comunidades afectadas por actividades destructivas del medio ambiente".

En los casos López Ostra vs España y Hattón vs. el Reino Unido, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sostuvo que los Estados están obligados "a adoptar medidas efectivas para proteger de daños ambientales el derecho al respeto de la vida privada y familiar, independientemente de que la contaminación sea resultado de acciones gubernamentales o de actuaciones privadas".

En materia de saneamiento de agua, la Relatora Especial sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, ha señalado que la obligación de "proteger" exige de los Estados "que promulguen y hagan cumplir las disposiciones necesarias para proteger los derechos humanos al agua y el saneamiento frente a los abusos cometidos por terceros contra los derechos humanos".

De ahí que existirá una violación a los derechos humanos de las personas, cuando el Estado es omiso en proteger la infraestructura de distribución del agua y de saneamiento contra la injerencia, los daños y la destrucción, o bien, cuando no se sanciona el uso indebido de los recursos hídricos por terceros.

Por ende, la obligación de los Estados "de proteger los derechos humanos y regular las actividades de terceros, y las responsabilidades de los agentes no estatales pasan por tanto cada vez más a un primer plano". Las obligaciones primordiales en materia de derechos humanos incumben al Estado, "y este debe garantizar que los agentes no estatales, incluidas las personas, no pongan en peligro el disfrute de los derechos humanos".

Con base en lo anteriormente expuesto, resulta evidente y claro que con la contaminación del Río, se acredita plenamente la violación al artículo 4 constitucional, en particular el de un derecho a un medio ambiente sano, y con ello se acredita la existencia de todos y cada uno de los actos reclamados, atribuidos a las autoridades responsables.

En ese sentido, ninguna de las autoridades responsables, en el ámbito de sus respectivas competencias ha realizado las acciones necesarias para evitar o, en su caso controlar la degradación de las aguas del Río Guanajuato y con ello han incumplido el tercer párrafo del artículo 1 Constitucional que señala textualmente:

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley

Sin embargo, todas las autoridades responsables contaminaron el Río Guanajuato, y lejos de promover, respetar proteger y garantizar los derechos humanos, han permanecido en la inacción, pues no realizan acción alguna que permita sanear y/o limpiar el Río Guanajuato.

QUINTO. – En nuestra Constitución Federal existe el derecho de todas las personas a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar como se desprende a continuación:

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.

Asimismo, con motivo de la reforma publicada el 8 de febrero de 2012 se incorporó al artículo 4 de la Constitución Federal el derecho de todas las personas al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible como se advierte a continuación:

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.

El derecho a un medio ambiente sano también se encuentra reconocido en diversos instrumentos internacionales.

Al respecto el Protocolo de San Salvador (Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales) señala:

"Artículo 11

Derecho a un medio ambiente sano

- 1. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos.*
- 2. Los Estados Partes promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente".*

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos señaló que la preservación de la naturaleza y los bosques constituye un valor cuya defensa trae consigo un interés constante y sostenido en la opinión pública y los poderes públicos. Al respecto, el Tribunal Europeo estableció que "las exigencias económicas e inclusive ciertos derechos fundamentales, incluyendo el derecho a la propiedad, no deben anteponerse frente a consideraciones relacionadas con la protección del medio ambiente.

La Constitución Federal en su artículo 4º consagra el derecho a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de las personas como un derecho fundamental erga omnes.

En este orden de ideas, resulta que el derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar de las personas, que como derecho fundamental consagra el artículo 4º constitucional, se desarrolla en dos aspectos, el primero, en un poder de exigencia y un deber de respeto erga omnes a preservar la sustentabilidad del entorno ambiental, que implica la no afectación ni lesión al mismo (eficacia horizontal de los derechos fundamentales) y, el segundo, en la obligación correlativa de las autoridades de vigilancia, conservación y garantía de que sean atendidas las regulaciones pertinentes (eficacia vertical). Al respecto resulta aplicable el siguiente criterio:

plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para: a) La reducción de la mortalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños; b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente; c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas; d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad. [Énfasis propio]

Según el mismo Comité DESC, los Estados parte tiene obligaciones específicas respecto del derecho a la salud, tales como las siguientes:

La obligación de cumplir requiere, en particular, que los Estados Partes reconozcan suficientemente el derecho a la salud en sus sistemas políticos y ordenamientos jurídicos nacionales, de preferencia mediante la aplicación de leyes, y adopten una política nacional de salud acompañada de un plan detallado para el ejercicio del derecho a la salud. Los Estados deben garantizar la atención de la salud, en particular estableciendo programas de inmunización contra las principales enfermedades infecciosas, y velar por el acceso igual de todos a los factores determinantes básicos de la salud, como alimentos nutritivos sanos y agua potable, servicios básicos de saneamiento y vivienda y condiciones de vida adecuadas. La infraestructura de la sanidad pública debe proporcionar servicios de salud sexual y genésica, incluida la maternidad segura, sobre todo en las zonas rurales. Los Estados tienen que velar por la apropiada formación de facultativos y demás personal médico, la existencia de un número suficiente de hospitales, clínicas y otros centros de salud, así como por la promoción y el apoyo a la creación de instituciones que prestan asesoramiento y servicios de salud mental, teniendo debidamente en cuenta la distribución equitativa a lo largo del país. Otras obligaciones incluyen el establecimiento de un sistema de seguro de salud público, privado o mixto que sea asequible a todos, el fomento de las investigaciones médicas y la educación en materia de salud, así como la organización de campañas de información, en particular por lo que se refiere al VIH/SIDA, la salud sexual y genésica, las prácticas tradicionales, la violencia en el hogar, y el uso indebido de alcohol, tabaco, estupefacientes y otras sustancias nocivas. Los Estados también tienen la obligación de adoptar medidas contra los peligros que para la salud representan la contaminación del medioambiente y las enfermedades profesionales, así como también contra cualquier otra amenaza que se determine mediante datos epidemiológicos. Con tal fin, los Estados deben formular y aplicar políticas nacionales con miras a reducir y suprimir la contaminación del aire, el agua y el suelo, incluida la contaminación causada por metales pesados tales como el plomo procedente de la gasolina. Asimismo, los Estados Partes deben formular, aplicar y revisar periódicamente una política nacional coherente destinada a reducir al mínimo los riesgos de accidentes laborales y enfermedades profesionales, así como formular una política nacional coherente en materia de seguridad en el empleo y servicios de salud¹. [Énfasis propio]

De la misma manera, tal Comité ha establecido que una de las prioridades de los Estados está la adopción de medidas para prevenir, tratar y combatir las enfermedades epidémicas y endémicas².

Como se desprende de lo anterior, el Estado mexicano al ser parte de este tratado internacional se encuentra obligado a garantizar el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel de posible de salud física y mental, el cual abarca la prevención de las enfermedades de las personas, inclusive aquellas que puedan desprenderse de enfermedades epidemiológicas.

Con relación a esto último, es como se puede interpretar, que el derecho a la salud no implica solamente la atención médica, sino que este incluye una amplia gama de factores socioeconómicos que promuevan las condiciones necesarias para que las personas puedan llevar una vida digna, como lo es la alimentación, la vivienda, el acceso al agua potable, condiciones sanitarias adecuadas y un medio ambiente sano. Esto tiene relación directa con que la salud es concebida por organismos, como la Organización Mundial de la Salud como "un estado de completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente como ausencia de afecciones o enfermedades"³

Por su parte en el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos, este derecho se encuentra contemplado en el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo De San Salvador", ratificado por el Estado mexicano en el año de 1996:

ARTÍCULO 1 Obligación de Adoptar Medidas Los Estados partes en el presente Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos se comprometen a adoptar las medidas necesarias tanto de orden interno como mediante la cooperación entre los Estados, especialmente económica y técnica, hasta el máximo de los recursos disponibles y tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin de lograr progresivamente, y de conformidad con la legislación interna, la plena efectividad de los derechos que se reconocen en el presente Protocolo.

ARTÍCULO 10. 1. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. 2. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados partes se comprometen a reconocer la salud como un bien público y particularmente a adoptar las siguientes medidas para garantizar este derecho: a. la atención primaria de la salud, entendiendo como tal la asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de todos los individuos y familiares de la comunidad; b. la extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los individuos sujetos a la jurisdicción del Estado; c. la total inmunización contra las principales enfermedades infecciosas; d. la prevención y el tratamiento de las enfermedades endémicas, profesionales y de otra índole; e. la educación de la población sobre la prevención y tratamiento de los problemas de salud, y f. la satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables. [Énfasis propio]

¹ COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES, E/C.12/2000/4, Observación no. 14.

² Cfr.

³ https://www.who.int/governance/eb/who_constitution_sp.pdf Constitución de la OMS, en su preámbulo.

SÉPTIMO. -Por lo que hace al quejoso menor de edad ÓSCAR FERNANDO AGUAYO VALADEZ, se solicita se aplique en su favor el principio de suplencia de la queja, aún ante la ausencia de conceptos de violación a agravios o ineficacia de los mismos, a la luz del artículo 79 de la Ley de Amparo que expresamente señala:

Artículo 79. La autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en los casos siguientes:

I. ...

II. En favor de los menores o incapaces, o en aquellos casos en que se afecte el orden y desarrollo de la familia;

En los casos de las fracciones I, II, III, IV, V y VII de este artículo la suplencia se dará aún ante la ausencia de conceptos de violación o agravios. En estos casos solo se expresará en las sentencias cuando la suplencia derive de un beneficio

Sin perjuicio de lo anteriormente señalado, se precisa que la contaminación medioambiental afecta especialmente a la infancia, -en este caso al quejoso menor de edad-, porque por un lado se está poniendo en peligro su derecho a la salud, a vivir en un entorno saludable, pero además se amenaza su futuro y el de las nuevas generaciones, así como su vida en el planeta. Está demostrado científicamente que la contaminación del agua -en este caso del Río Guanajuato-, y del aire debido al olor a materia fecal humana, impacta de una forma más negativa en la salud de los niños y las niñas, por lo cual se considera que JOSÉ MARÍA AGUILAR JASSO, se encuentra en un grupo vulnerable.

Aunado al hecho que se debe tomar en cuenta el artículo 43 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que establece textualmente:

Artículo 43. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en un medio ambiente sano y sustentable, y en condiciones que permitan su desarrollo, bienestar, crecimiento saludable y armonioso, tanto físico como mental, material, espiritual, ético, cultural y social.

Sin embargo, las autoridades responsables se encuentran violando dicho artículo y dicho derecho del quejoso menor de edad, dado que con la contaminación del Río Guanajuato, JOSÉ MARÍA AGUILAR JASSO, actualmente no está viviendo en un medio ambiente sano ni sustentable, por la contaminación del Río Guanajuato por el que camina a diario, y esta autoridad debe prestar especial importancia al tratarse de un menor de edad indefenso.

En ese sentido el menor de edad JOSÉ MARÍA AGUILAR JASSO, están inconformes con todos y cada uno de los actos reclamados.

IX. - FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DE LOS ACTOS IMPUGNADOS. - Se manifiesta que tuvimos conocimiento de todos y cada uno de los actos impugnados el día 14 de Noviembre de 2022 aproximadamente a las 18:00 horas, cuando íbamos todos juntos caminando y, al pasar por un costado del Río, pudimos apreciar con nuestros propios sentidos de la VISTA Y OLFATO que el AGUA DEL RÍO LITERALMENTE ESTÁ DE COLOR VERDE OSCURO, y además HUELE A EXCREMENTO HUMANO, inclusive dan ganas de vomitar, al momento de ir caminando al lado del Río. Ese mismo día, nos dedicamos a hacer una pequeña investigación preguntándole a otras personas que iban caminando por ahí, quienes no quisieron identificarse, y de esa manera fue que nos enteramos de la existencia de todos y cada uno de los actos y omisiones impugnados y que se les atribuyen a todas las autoridades responsables en los términos señalados en esta demanda.

Actualmente, desde el 14 de Noviembre de 2022 hacemos caminatas diarias con motivo de esparcimiento, para disfrutar de la naturaleza y de ese Río que se ubica en nuestro municipio, pero la experiencia está siendo muy desagradable, precisamente por la contaminación del Río Guanajuato que se encuentra en el Municipio que habitamos.

X. - INTERÉS LEGÍTIMO Se señala, que los suscritos contamos con interés legítimo para que se admita la presente demanda, en virtud de que utilizamos el ecosistema del Río para dar caminatas en la naturaleza, aunado al hecho de que todos somos habitantes del Municipio de Guanajuato donde se encuentra el Río Guanajuato, que atraviesa prácticamente toda la ciudad y continúa hasta la Ciudad de Irapuato.

Aunado a lo anterior, debe considerarse lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Recurso de Queja 1/2017, en donde se resolvió que y citamos textualmente:

"Pues bien, ya quedó dicho que de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, para desechar una demanda de amparo se requiere la existencia de una causa manifiesta e indudable, esto es, de un motivo que el juez de distrito advierte en forma patente y clara de la simple lectura de la demanda y sus anexos, de modo que aun admitiéndola a trámite, en el dictado de la sentencia definitiva no podría hacerse otra cosa que decretar el sobreseimiento, precisamente, por esa causa de improcedencia que desde un principio revela la aludida demanda.

También se dijo que de acuerdo con el nuevo marco de regularidad constitucional y de regulación de los actos susceptibles de ser reclamados mediante juicio de amparo, es posible reclamar omisiones que violenten derechos fundamentales reconocidos tanto por la Constitución como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.

Además, también se explicó que el interés legítimo es uno cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto, cuyo examen derivado de la complejidad de las relaciones jurídicas e incluso de la naturaleza del acto reclamado y la violación alegada puede requerir la aportación de elementos de convicción aptos y suficientes que acrediten la potencial afectación a la esfera jurídica del quejoso.

Sobre esas bases, esta Segunda Sala considera que es inexacta la determinación del a quo de considerar que en el caso que nos ocupa se actualiza de manera manifiesta e indudable la hipótesis de improcedencia relativa a falta de interés legítimo, máxime que, como se dijo, el acto reclamado tiene naturaleza omisiva y precisamente se combate por

segundo párrafo del artículo 147 de la Ley de Amparo, lo que no implica que se resuelvan cuestiones propiamente de fondo, sino evitar provisionalmente un perjuicio a los gobernados, por lo cual atendiendo a cada caso concreto podrá concederse la medida cautelar y, de resultar jurídica y materialmente factible, restablecer de manera provisional al quejoso en el disfrute de la prerrogativa que le fue afectada, sin importar si implica un hacer o un no hacer, como acontece tratándose de las omisiones, por ejemplo la afectación al medio ambiente, el cual se vería perjudicado por la omisión atribuida a la autoridad encargada de la recolección de basura de cumplir con su obligación o por no verificar las autoridades ambientales si alguna persona está contaminando el entorno.

PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.

Contradicción de tesis 25/2017. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materia Administrativa del Tercer Circuito. 24 de septiembre de 2018. Unanimidad de seis votos de los Magistrados Enrique Rodríguez Olmedo, Hugo Gómez Ávila, Marcos García José, Jorge Héctor Cortés Ortiz, Mario Alberto Domínguez Trejo y Moisés Muñoz Padilla. Ausente: Jaime C. Ramos Carreón. Ponente: Hugo Gómez Ávila. Secretario: Aurelio Méndez Echeagaray.

Tesis y criterio contendientes:

Tesis III.2o.A.66 A (10a.), de título y subtítulo: "DERECHOS HUMANOS A LA SALUD Y A UN MEDIO AMBIENTE SANO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL RESPECTO DE OMISIONES DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES QUE CONLLEVEN UNA AFECTACIÓN DIRECTA A AQUÉLLOS.", aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 3 de junio de 2016 a las 10:03 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 31, Tomo IV, junio de 2016, página 2896, y

El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el incidente de suspensión (revisión) 578/2016.

Nota: En términos del artículo 44, último párrafo, del Acuerdo General 52/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma, adiciona y deroga disposiciones del similar 8/2015, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, esta tesis forma parte del engrose relativo a la contradicción de tesis 25/2017, resuelta por el Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito.

Esta tesis se publicó el viernes 18 de enero de 2019 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 21 de enero de 2019, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

Esta tesis se publicó el viernes 24 de junio de 2016 a las 10:24 horas en el Semanario Judicial de la Federación."

Así y en mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, a usted C. Tribunal, atentamente le pedimos

PRIMERO.- Tenernos por medio del presente curso, con la personalidad que ostentamos demandando en nuestro favor el Amparo y Protección de la Justicia Federal.

SEGUNDO.- Admitir a trámite la presente demanda de amparo que se hace valer en contra de los actos de las autoridades señaladas como responsables.

TERCERO.- Conceder la suspensión provisional y en su momento la definitiva, para el efecto que en derecho proceda, solicitando de este momento copia certificada de los autos que decidan sobre la suspensión provisional y sobre la suspensión definitiva.

CUARTO.- Previos los tramites de ley, emitir sentencia, en la que se resuelva, que la Justicia de la Unión ampara y protege a los escritos.

PROTESTAMOS LO NECESARIO

Por propio Derecho y en nombre y representación de



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:
0891001000000000020009994.p7m
Autoridad Certificadora:
Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal
Firmante(s): 1

FIRMANTE				
Nombre:	[REDACTED]	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No. serie:	[REDACTED]	.41.7a	Revocación:	Bien No revocado
Fecha: (UTC / CDMX)	22/11/22 17:30:08 - 22/11/22 11:30:08		Status:	Bien Valida
Algoritmo:	RSA - SHA256			
Cadena de firma:	[REDACTED]			
OCSP				
Fecha: (UTC / CDMX)	22/11/22 17:30:08 - 22/11/22 11:30:08			
Nombre del respondedor:	OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.03			
TSP				
Fecha : (UTC / CDMX)	22/11/22 17:30:09 - 22/11/22 11:30:09			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	17205386			
Datos estampillados:	Ehb1UggxTRMQfpakd8TaEOn1f8A=			



Identificador Electrónico
24032000120210000349



Clave Única de Registro de Población
AUV0200504HGTGLSA8



Número de Certificado de Nacimiento
26779048

Entidad de Registro
SAN LUIS POTOSI

Municipio de Registro
SANTA MARIA DEL RIO

Estados Unidos Mexicanos

Acta de Nacimiento

Oficialía	Fecha de Registro	Libro	Número de Acta
0001	26/02/2021	1	123

Datos de la Persona Registrada

[Redacted Name and Surname]

HOMBRE

04/05/2020

LEON

Sexo:

Fecha de Nacimiento:

GUANAJUATO

Lugar de Nacimiento:

Datos de Filiación de la Persona Registrada

[Redacted Name and Surname]

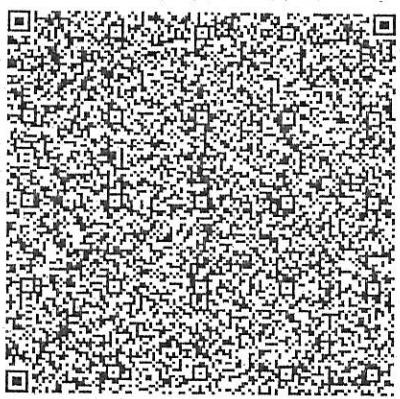
Nombre(s): Primer Apellido: Segundo Apellido: Nacionalidad: CURP:

Nombre(s): Primer Apellido: Segundo Apellido: Nacionalidad: CURP:

Anotaciones Marginales:	Certificación:
Sin anotaciones marginales.	Se extiende la presente copia certificada, con fundamento en los artículos 2, 18, 29 fracción VIII y 61 de la Ley del Registro Civil del Estado de San Luis Potosí y el artículo 51 del Reglamento de la Ley del Registro Civil del Estado de San Luis Potosí. La Firma Electrónica con la que cuenta es vigente a la fecha de expedición; tiene validez jurídica y probatoria de acuerdo a las disposiciones legales en la materia. A los 27 días del mes de Febrero de 2021. Day fe.

Firma Electrónica:

QV VW Tz Iw MD Uw NE hh VE dM U0 E4 IE 9T Q0 FS IE ZF Uk 5B Tk RP IE FH VU FZ T3
xW QU xB RE Va fD Ey ND Az Mj Aw MD Ey MD lx MD Ax Mj Mw IE 18 NC Bk ZS Bl YX lv IG
Rl ID lw Mj B8 U0 FO IE xv Sv Mg UE 9U T1 NJ IG 51 bG x8 bn Vs bA ==



Código de Verificación
12403200012021001230



Directora del Registro Civil del Estado de San Luis Potosí
Lic. Luz María Lastras Martínez



La presente copia certificada del acta es un extracto del acta que se encuentra en los archivos del Registro Civil correspondiente, la cual se ha expedido con base en las disposiciones jurídicas aplicables, cuyos datos pueden ser verificados en la página <https://cevar.registrocivil.gob.mx/eVAR/ConsultaFolio.jsp>, capturando el Identificador Electrónico que se encuentra en la parte superior derecha del acta, para su consulta en dispositivos móviles, descarga una aplicación para lectura del código QR.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:
0891001000000000020009993.p7m
Autoridad Certificadora:
Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal
Firmante(s): 1

FIRMANTE		Validéz:		
Nombre:	[REDACTED]	BIEN	Vigente	
FIRMA		Revocación:		
No. serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.02.41.7a	Bien	No revocado	
Fecha: (UTC / CDMX)	22/11/22 17:30:08 - 22/11/22 11:30:08	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA - SHA256			
Cadena de firma:	[REDACTED]			
OCSP		TSP		
Fecha: (UTC / CDMX)	22/11/22 17:30:09 - 22/11/22 11:30:09			
Nombre del respondedor:	OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.03			
Fecha : (UTC / CDMX)	22/11/22 17:30:09 - 22/11/22 11:30:09			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	17205389			
Datos estampillados:	Vumrf7+1BQ+X42kg6Gp6kp41JY4=			

17236
JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO
EN GUANAJUATO, GTO.
Presentado por SISE
originalmente escrito, tal y como
a las 10:25 horas del día 24 de Noviembre del 2022

JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO
CON SEDE EN ESTA CIUDAD
P R E S E N T E:

Quien suscribe [REDACTED], con la personalidad que tengo previamente acreditada dentro del Juicio de Amparo radicado bajo el número de expediente [REDACTED] comparezco respetuosamente a efecto de cumplir con el requerimiento que se me hizo mediante auto de fecha 23 de Noviembre de 2022 y notificado al suscrito el día de hoy a través de la plataforma electrónica.

En ese sentido procedo a señalar **BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD:**

- 1) Precise la ubicación de su domicilio particular y del de su representado, toda vez que del contenido de su demanda refiere que son habitantes de esta ciudad, sin que al efecto lo haya precisado en concreto; asimismo, anexe la prueba documental correspondiente, con la cual justifique lo anterior. Preciso **BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD** que mi domicilio y el de mi representado se ubica en [REDACTED] [REDACTED] tal como lo acredito con el Original del Recibo de Agua Potable expedido a mí nombre por el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato (ANEXO 1). De donde incluso se desprende el cobro que se me hace por el Tratamiento de Aguas Negras, bajo el concepto de "TRATAMIENTO". Con lo que se justifica mi domicilio.

No se omite precisar **BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD** que tal como lo señalé en el penúltimo párrafo del Hecho 5) del escrito de demanda inicial (Página 2 de la demanda), actualmente (desde el 14 de Noviembre de 2022) el suscrito y mi representado, hacemos caminatas diarias por un Costado del Río, con motivo de esparcimiento para disfrutar de la naturaleza y de ese Río.

- 2) Manifieste si es su deseo señalar como autoridades responsables al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, al Ayuntamiento del Municipio de Guanajuato y a la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato, quienes en términos de los artículos 6, 7, 8, 121, 122 y 123 de la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del Estado de Guanajuato, podrían tener injerencia en los actos reclamados. Manifiesto por propio derecho y en nombre y representación de mi menor hijo de iniciales

O.F.A.V. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que SÍ es mi deseo en este acto señalar como autoridades responsables al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, al Ayuntamiento del Municipio de Guanajuato y a la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato.

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, es que solicito respetuosamente:

ÚNICO. – Se me tenga por cumpliendo en tiempo y forma el requerimiento y en consecuencia se ADMITA a trámite la demanda.

GUANAJUATO, GUANAJUATO, 24 DE NOVIEMBRE DE 2022

PROTESTO LO NECESARIO EN DERECHO Y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ATENTAMENTE

[Redacted Signature]

Por propio Derecho y en nombre y Representación de ÓSCAR FERNANDO AGUAYO
VALADEZ



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:
03130020000000000020064310.p7m
Autoridad Certificadora:
Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal
Firmante(s): 1

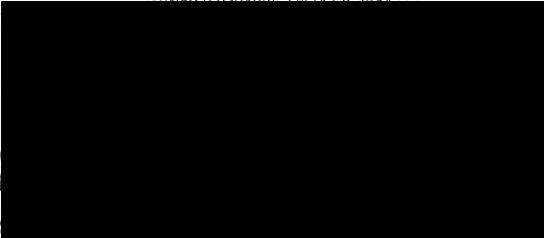
FIRMANTE				
Nombre:		Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No. serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.02.41.7a	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha: (UTC / CDMX)	24/11/22 16:13:19 - 24/11/22 10:13:19	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA - SHA256			
Cadena de firma:				
OCSP				
Fecha: (UTC / CDMX)	24/11/22 16:13:19 - 24/11/22 10:13:19			
Nombre del respondedor:	OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.03			
TSP				
Fecha : (UTC / CDMX)	24/11/22 16:13:19 - 24/11/22 10:13:19			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	18046555			
Datos estampillados:	ggG0CBc2wsF5ZWmg99MnSpR4mdo=			



SIMAPAG

Comprobante de pago

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato
Av Juarez 137, zona centro C.P. 36000, Guanajuato, Gto.
Atención a usuarios Tel: 4771 2000



Concepto	Importe
CONSUMO AGUA	\$158.46
RENTA DRENAJE	\$31.69
RENTA SANEAMIENTO	\$22.18
CONSUMO REZAGO AGUA	\$305.84
RENTA REZAGO DRENAJE	\$61.37
RENTA REZAGO SANEAMIENTO	\$42.96
RENTA CARGOS AGUA	\$9.42
RENTA CARGOS DRENAJE	\$1.89
RENTA CARGOS SANEAMIENTO	\$1.32
CRUZ ROJA	\$6.00
BOMBEROS VOLUNTARIOS AC	\$6.00
REDONDEO ACTUAL	\$1.19
BOMBEROS SIMUB	\$6.00
REDONDEO ANTERIOR	\$0.75
IVA	\$25.31
Total	\$679.00
Efectivo	\$1,000.0
Cambio	\$321.00

* Pago Consumo Mensual *

Impreso: Mirna del Rayo Mata 08/10/2022 12:12 05 p.
m.



0010489261F
GRACIAS POR SU PAGO



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:
03130020000000000020064311.p7m
Autoridad Certificadora:
Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal
Firmante(s): 1

FIRMANTE		BIEN	Vigente
Nombre:	[REDACTED]		
No. serie:	[REDACTED]	ón:	Bien No revocado
Fecha: (UTC / CDMX)	[REDACTED]		Bien Valida
Algoritmo:	RSA - SHA256		
Cadena de firma:	c5 6f 12 19 8e d0 20 33 81 ac f5 dc 8e a0 ae 97 4a 91 c9 9f 90 5e 4e f1 b6 f7 8e ef 15 02 44 e5 a2 50 14 49 23 6a d7 5b ad 57 63 2a 8f 26 47 a8 b3 44 35 50 91 bd ad 88 e1 38 49 87 99 d3 90 ea 66 3c d4 04 21 70 62 46 5c a1 c9 e6 dd 4d 7d 8e 48 56 d4 ca b8 12 ac fd 3a 9d 03 97 58 f1 8f 98 c8 07 2f 32 33 5b 83 e4 31 58 c1 9d 47 01 7b ef 1c 16 32 c9 72 ca f4 2e de 2c 96 5c 1b 46 5d b6 39 70 84 61 17 9b de f5 7c 9f a7 f6 a6 ce 22 3e 87 22 22 93 c4 3a 66 fc 72 c2 05 6e d3 e0 5f 53 7a ee ff 7c 43 92 ad c2 d8 f5 bc d1 d3 29 34 ef cf 04 e3 16 bb d7 34 a1 17 5c c9 b9 83 73 3b 9b 7f 58 65 0e 6b 3e 1c 26 63 5b e8 96 b4 ba a9 3b ae f5 98 1a cf a9 89 f1 38 e4 1b 8b 22 5b be c2 4d e2 38 ed 49 18 30 ef d4 98 26 f0 58 de 3a f4 5f 24 98 ea 1e 1c d6 42 86 6d 6c 15 bd fb c3 f3		
OCSP			
Fecha: (UTC / CDMX)	24/11/22 16:13:20 - 24/11/22 10:13:20		
Nombre del respondedor:	OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal		
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal		
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.03		
TSP			
Fecha : (UTC / CDMX)	24/11/22 16:13:20 - 24/11/22 10:13:20		
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal		
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal		
Identificador de la respuesta TSP:	18046557		
Datos estampillados:	rVRdacAC6AneJX9bE8rVL2kAsCrc=		

Guanajuato y a la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato.

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, es que solicito respetuosamente:

ÚNICO. – Se me tenga por cumpliendo en tiempo y forma el requerimiento y en consecuencia se **ADMITA** a trámite la demanda.

GUANAJUATO, GUANAJUATO, 24 DE NOVIEMBRE DE 2022

PROTESTO LO NECESARIO EN DERECHO Y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ATENTAMENTE

[REDACTED]
Por propio Derecho y en nombre y Representación de [REDACTED]
[REDACTED]

JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO

CON SEDE EN ESTA CIUDAD

P R E S E N T E:

Quien suscribo [REDACTED], con la personalidad que tengo previamente acreditada dentro del Juicio de Amparo radicado bajo el número de expediente **1528/2022-VIII** comparezco respetuosamente a efecto de cumplir con el requerimiento que se me hizo mediante auto de fecha 23 de Noviembre de 2022 y notificado al suscrito el día de hoy a través de la plataforma electrónica.

En ese sentido procedo a señalar **BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD**:

- **Precise la ubicación de su domicilio particular y del de su representado, toda vez que del contenido de su demanda refiere que son habitantes de esta ciudad, sin que al efecto lo haya precisado en concreto; asimismo, anexe la prueba documental correspondiente, con la cual justifique lo anterior. Preciso **BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD** que mi domicilio y el de mi representado se ubica en Calle Cocona No. 16 A Fraccionamiento Manantial, en esta Ciudad de Guanajuato, tal como lo acredito con el **Original del Recibo de Agua Potable** expedido a mí nombre por el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato (ANEXO 1). De donde incluso se desprende el cobro que se me hace por el Tratamiento de Aguas Negras, bajo el concepto de **“TRATAMIENTO”**. Con lo que se justifica mi domicilio.**

No se omite precisar **BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD** que tal como lo señalé en el penúltimo párrafo del Hecho 5) del escrito de demanda inicial (Página 2 de la demanda), actualmente (desde el 14 de Noviembre de 2022) el suscrito y mi representado, hacemos caminatas diarias por un Costado del Río, con motivo de esparcimiento para disfrutar de la naturaleza y de ese Río.

- **Manifieste si es su deseo señalar como autoridades responsables al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, al Ayuntamiento del Municipio de Guanajuato y a la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato, quienes en términos de los artículos 6, 7, 8, 121, 122 y 123 de la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del Estado de Guanajuato, podrían tener injerencia en los actos reclamados. Manifiesto por propio derecho y en nombre y representación de mi menor hijo de iniciales O.F.A.V. **BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD** que **SÍ es mi deseo en este acto señalar como autoridades responsables** al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, al Ayuntamiento del Municipio de Guanajuato y a la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato.**

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, es que solicito respetuosamente:

ÚNICO. – Se me tenga por cumpliendo en tiempo y forma el requerimiento y en consecuencia se **ADMITA** a trámite la demanda.

GUANAJUATO, GUANAJUATO, 24 DE NOVIEMBRE DE 2022

PROTESTO LO NECESARIO EN DERECHO Y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ATENTAMENTE



Por propio Derecho y en nombre y Representación de **ÓSCAR FERNANDO AGUAYO VALADEZ**



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:
031300200000000000020064312.p7m
Autoridad Certificadora:
Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal
Firmante(s): 1

FIRMANTE				
Nombre:	OSCAR EDMUNDO AGUAYO ARREDONDO	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No. serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.02.41.7a	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha: (UTC/ CDMX)	24/11/22 16:13:21 - 24/11/22 10:13:21	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA - SHA256			
Cadena de firma:	26 e3 01 66 e5 b0 6d fc fc 54 d7 f1 c6 31 40 62 18 ab 1b 37 32 ef 4b 85 f2 59 d1 33 de 16 e3 a9 01 4d 06 66 a5 75 c7 24 54 8b c6 32 8a 76 53 76 0a 41 ba 2c 39 a2 c3 e6 00 00 d1 0b e0 93 85 be 15 54 80 9c a3 1b bf 8c 10 2f 1a e8 39 0c 5c c4 10 b0 c3 72 74 65 e6 2b 56 9c 29 73 bc 21 aa 07 07 3d 53 af cc 91 4e 7d 62 d0 37 7b 54 ab 04 38 4c 61 62 82 39 7c 60 e2 3f e8 3e 94 6b 1c a1 b1 8f 75 35 f4 76 f4 47 a2 db 42 38 cf 66 66 99 b6 ad 4b c0 85 58 72 d8 9d ad e1 8f 0b 13 9c 21 47 90 8c 4b 99 e6 4a dd 56 6c 92 08 81 2d 5a 8f a0 1e 79 a4 80 37 80 fe cd 4e 18 12 fa d0 06 5b 34 89 83 e7 15 99 2f 79 56 f3 a4 c4 e8 25 a1 32 3b 52 04 15 80 91 ba 3a 8c 3b 15 d2 39 f7 3c d2 3d 6f d3 38 6c a5 b0 80 ab c0 2b 07 dd 9b cd 9a 7f 5a 21 71 d2 f0 6c 6d 6f a5 39 31 a0 fe 74 88 5b			
OCSP				
Fecha: (UTC / CDMX)	24/11/22 16:13:21 - 24/11/22 10:13:21			
Nombre del respondedor:	OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.03			
TSP				
Fecha : (UTC / CDMX)	24/11/22 16:13:21 - 24/11/22 10:13:21			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	18046569			
Datos estampillados:	2Huo6W928weXMzaV14ovNOGzB5w=			